

Una estrategia compartida para una paz firme y duradera*

LA PAZ: UNA PRIORIDAD NACIONAL

Vengo a hablarles de manera franca y desprevenida. A pedirles que reflexionen sobre la verdadera Colombia. Sobre nuestras fortalezas, dificultades y decisiones. Y, sobre todo, a compartir con ustedes el decidido empeño del Gobierno Nacional de transformar nuestra sociedad para el siglo veintiuno, sobre la base de un compromiso con la paz, la democracia, los Derechos Humanos y la defensa de nuestra integridad territorial.

Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Es necesario actuar para producir grandes cambios que permitan reencauzar a nuestro país. No podemos permanecer pasivos. Hemos abierto una ventana llena de oportunidades que los colombianos queremos consolidar. La so-

lidaridad de la comunidad internacional ha sido muy significativa en esta etapa crucial de la historia del país. Su concurso ahora es más importante que nunca.

La paz ha sido definida por el presidente Pastrana como la prioridad nacional. Como Presidente electo, no dudó en romper tabúes, y, en un gesto audaz, entrevistarse en la selva de Colombia con el jefe del grupo insurgente más numeroso. Luego, y desde el propio discurso de posesión, interpretando el sentimiento de mis compatriotas, situó este asunto como la prioridad central entre los problemas a ser resueltos y, al mismo tiempo, marcó la pauta de lo que sería su estrategia: la negociación, para dar una salida a un conflicto que se prolonga, en sus diferentes manifestaciones, casi por medio siglo.

* Palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Guillermo Fernández De Soto, ante el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz. Madrid, 7 de julio del 2000. Documento proporcionado por la Embajada de Colombia en Ecuador.

La Colombia de nuestra historia y esperanza

Colombia es una sociedad compleja y polifacética, que da lugar a múltiples miradas. Una de ellas es la positiva, puesto que se trata de un país variado, con una excelente posición geográfica en la mitad de América, que lo hace ribereño del Caribe, del Pacífico, del Amazonas. Es un país andino, con todo lo que ello implica en variedad de climas y montañas. Es rico en recursos minerales y por su potencial hídrico y la biodiversidad que posee, se coloca entre los primeros del mundo.

Colombia puede ufanarse de ser un régimen democrático y de haber mantenido gobiernos civiles elegidos popularmente, desde la época de su independencia; y es uno de los pocos países que tiene una práctica periódica e ininterrumpida de elecciones desde 1830.

En el ámbito económico, y hasta que se presentara la crisis que ahora comienza a superar, tuvo un crecimiento continuado y sin sobresaltos por más de cuarenta años.

Es el tercer país en población de América Latina, con cuarenta millones de habitantes; es prolífico en artistas, científicos, empresarios, deportistas; posee un amplio conjunto de universidades, y la inmensa mayoría de su población quiere la democracia, ama la paz y desea trabajar.

Esta es la Colombia de nuestra historia y de nuestras esperanzas.

Pero, de otra parte, es una nación que enfrenta hoy una difícil situación.

La violencia y el narcotráfico

Para entender a la Colombia de hoy debemos mirar las cosas por lo que son y, en este caso, también, por lo que no son.

Para empezar, mi país no se encuentra en una guerra civil, a pesar de lo que se dice en los medios internacionales. Una guerra civil ocurre en una nación dividida en bandos armados con fuerte apoyo popular. En Colombia el caso es radicalmente diferente, con solo cerca del 4% de la población que tiene una imagen positiva de la insurgencia. Y lo más significativo es que no lograron convencer a los colombianos de que son una alternativa legítima a nuestra democracia.

Colombia padece el inmenso problema de violencia que, por su prolongación, sus manifestaciones, sus actores y sus causas, se ha venido modificando y adquiriendo nuevas facetas que lo hacen especialmente complejo.

En efecto, a partir de la llamada "violencia" en los años cincuenta, producto del secular enfrentamiento político, Colombia ha padecido la confrontación en forma recurrente. En muchas zonas, ésta fue derivando en violencia de contenido social marcada por la división ideológica

del mundo bipolar.

Fue así como surgieron grupos insurgentes contra el Estado, que en sus apoyos internacionales y en sus líneas ideológicas correspondían muchas veces a las profundas pugnas y diferencias del campo socialista. Dentro de ellos, el M-19, el EPL y el Quintín Lame se reincorporaron a la vida civil en 1991 en uno de los procesos exitosos de negociación que ha conocido la sociedad colombiana en los últimos años y que originó la nueva Constitución de 1991, con amplia participación de los hasta entonces grupos insurgentes y que produjo cambios importantes en los balances de poder, tanto en lo territorial como en lo judicial.

Si nos atenemos solo a las filiaciones ideológicas de tipo internacional, se debiera concluir que se trata de un conflicto propio de la Guerra Fría ya superada. La persistencia confiere al conflicto colombiano una faceta arcaica. Lo cierto es que estos grupos se mantuvieron y aún crecieron en el ámbito de la incapacidad del Estado colombiano para hacer presencia efectiva en su extenso territorio y al amparo de las inequidades sociales propias de un país en desarrollo.

La Colombia de hoy es una sociedad mucho más moderna, urbana y justa de lo que era hace medio siglo al iniciarse el conflicto. Aun cuando la violencia se ve alimentada por los miles de millones de dólares generados por el narcotráfico, jamás

podrá derrotar a nuestra democracia, menos aún si contamos con la solidaridad de todos ustedes.

Para superar este conflicto histórico, el gobierno ha propuesto una iniciativa de solución política y negociada, que avanza con el establecimiento de una zona de distensión, la definición de una agenda de negociación y con mecanismos de participación de la sociedad civil.

Pero debemos también entender que a las complejidades de este conflicto se sumó a partir de la década de los ochenta el problema de la droga.

La literatura académica aún discute por qué se dieron en Colombia las condiciones para que prosperara este negocio. Lo cierto es que, con un mercado internacional creciente y voraz, este infame negocio se extendió; con él surgieron los narcotraficantes, los carteles, las bandas criminales; y el narcotráfico se convirtió en un disolvente de las estructuras sociales y en un potenciador de la violencia.

El narcotráfico tiene tantos rostros como el mítico dios Proteo, con la peculiaridad de que todos ellos son dañinos. En efecto, corroe la estructura social con sus asesinatos, amenazas y prácticas autoritarias y violentas contra jueces, funcionarios, periodistas y ciudadanos. Con la violencia y la corrupción que promueve, las cuales necesita para subsistir, ataca las bases del régimen democrático. Con sus necesidades

de expansión golpeó y resquebrajó a las comunidades campesinas, produciendo desplazamientos forzados. Con el espejismo de la ganancia rápida, el narcotráfico contribuyó a distorsionar y empobrecer la economía, inflando irrealmente los precios, promoviendo una cultura de especulación y financiando el contrabando que golpeó fuertemente nuestra industria.

En lo ecológico, es causante de un tremendo desastre, tal como lo atestiguan las cien mil hectáreas de bosque que por su causa se destruyen anualmente. Bosques necesarios para el ecosistema amazónico y para los nacimientos de aguas que se secan todos los días en los Andes, por causa de la deforestación de los páramos. Por cada hectárea de coca o de amapola que se planta, se destruyen cuatro hectáreas de bosque. Por causa de este negocio criminal, cada año son vertidos a las aguas 200 000 galones de herbicidas, 16 000 toneladas de fertilizantes químicos y 100 000 galones de veneno, que destruyen las tierras y los ríos de Colombia, fundamentalmente en la región de la Amazonia.

LA CORRESPONSABILIDAD: DE LA RETÓRICA A LA PRÁCTICA

Así, en el centro de las diferentes violencias que azotan a Colombia, se sitúa crecientemente el narcotráfico, convirtiéndose a su vez en

el gran enemigo de una negociación de paz sólida y estable. A su amparo prospera la delincuencia común y se multiplican los homicidios porque, en sus códigos, la muerte es el procedimiento para quien se sale de ellos. El narcotráfico financia las bandas de sicarios que en campos y ciudades asesinan a sueldo; corrompe a agentes del Estado que, de manera aislada, cometen acciones criminales que violan los Derechos Humanos; crea y patrocina grupos de autodefensa y, por supuesto, financia crecientemente a los grupos insurgentes que se lucran del negocio cuando cobran a los narcotraficantes por la protección de sus cultivos, o cuando, en casos específicos, entran en fases del negocio criminal.

Por lo tanto, sin perder de vista la dimensión histórica del conflicto colombiano, lo que debe entenderse es la forma como el narcotráfico, con sus desproporcionadas utilidades y efectos, transformó la naturaleza de nuestro conflicto.

Mi país, tengo la certeza, sería una nación en paz, una nación que ya habría resuelto su conflicto histórico, si no fuera por el tráfico ilegal de las drogas y, por ello, enfrentarlo es quitarle el oxígeno que permite su respiración. Entender el papel del narcotráfico en el conflicto colombiano es necesario para darle una real oportunidad a la paz.

Ninguna nación ha sufrido tanto por el auge y la demanda de drogas durante esta última genera-

ción. Y en vez de caer víctimas de esta amenaza, la hemos enfrentado con grandes sacrificios. Pero el narcotráfico no es un asunto ni propio ni exclusivo de Colombia. Aunque mucho se tuvo que luchar para que fuera aceptada esta verdad, nadie discute hoy el hecho de que el problema de las drogas ilícitas es todo un proceso ininterrumpido en el cual entran la producción, el procesamiento, el transporte, la recepción en los puertos del exterior y la venta en esos mercados, el consumo, el blanqueo de las inmensas sumas de dinero en el circuito internacional y que, anexa a esa actividad criminal, están el envío y la utilización ilegales de precursores químicos, el contrabando, el tráfico de armas y el crimen transnacional.

De allí que, ante un problema de tan inmensas proporciones, sea innegable la aceptación de la responsabilidad, de la responsabilidad compartida, la cual, en la práctica, implica la obligación de cada Estado de atacar los factores del problema pero, en el mismo grado, la necesidad de un concierto y de una cooperación internacional para enfrentarlos, compensando a los Estados más afectados por la violencia y a los más débiles económicamente. Como lo expresó el presidente Andrés Pastrana, en su discurso de Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo: "No es mucho lo que pide mi país: solamente que cada miembro de la comunidad cumpla con su parte en la tarea, en desarrollo del principio de

responsabilidad compartida. Y que todos podamos asumir los costos de las soluciones duraderas en la medida de las posibilidades y los recursos disponibles".

Afortunadamente, la comunidad internacional entiende y comparte este planteamiento y, en consecuencia, está dando los pasos para que del enunciado se pase a la realización. Así, por ejemplo, en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Grupo de Río, que se reunió en Cartagena el 15 y 16 de junio, además de expresar su solidaridad y apoyo al proceso de paz y a los planes de desarrollo social y económico que viene promoviendo el gobierno de Colombia, en la Declaración Final los Mandatarios reiteraron que "Para hacer frente al problema mundial de las drogas, hemos venido trabajando con un enfoque integral, basado en el principio de la responsabilidad compartida, y creemos que es necesario un decidido esfuerzo de la comunidad internacional que imprima a esa lucha un carácter global, tal como lo acordamos en 1998 durante el XX Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas".

La paz, nuestra estrategia para Colombia

Porque Colombia padece una grave violencia, el presidente Pastra-

na, como ya señalé, situó la paz como una prioridad. Porque el narcotráfico es el combustible que alimenta las diferentes violencias, enfrentarlo es quitarle fuerza a los factores de la guerra. Y puesto que la comunidad internacional, al igual que lo ha hecho en otros conflictos, puede jugar un papel vital en la solución del conflicto interno y ya que el narcotráfico implica la corresponsabilidad, Colombia acude a la solidaridad internacional para fortalecer la paz, al mismo tiempo que asume sus propias responsabilidades.

Colombia es consciente de la necesidad de apoyo y de ayuda internacional para enfrentar sus graves problemas. Es consciente del papel que puede jugar la comunidad internacional en el proceso de la paz, sobre todo por el camino que el gobierno colombiano ha escogido, que es el de la negociación y no el de la imposición militar para acabar al adversario. Colombia necesita hacer más efectivo su poder judicial, necesita tener una fuerza pública más profesional, que proteja a los ciudadanos, que respete y haga respetar sus Derechos Humanos y que, dentro del marco de la ley, haga valer las prerrogativas inherentes al Estado, frente a las diferentes modalidades de crimen y de violencia. Colombia necesita fortalecer sus instituciones democráticas como condición para la sostenibilidad de la paz.

La estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social que hoy les presentamos es un plan

de paz. Es de paz, porque busca que la cooperación internacional, unida al esfuerzo propio, sea invertida con un sentido eminentemente social. Que se dirija a coadyuvar el esfuerzo de las propias comunidades y de sus propuestas de construcción de su tejido social. Que dé apoyo a los desplazados que ha dejado el conflicto y que contribuya a crear las condiciones para que puedan retornar a sus hogares. Que se fortalezcan las instituciones que protegen los Derechos Humanos. Que se ponga en práctica todo un plan de apoyo y de vías de comunicación, para que las personas que se dedican, como pequeños cultivadores, a la producción de droga, cuenten con los medios necesarios para producir bienes lícitos y puedan sacar estos productos a los centros de consumo.

Esta estrategia representa una oportunidad sin antecedentes para que la comunidad internacional lleve a la práctica el principio de la corresponsabilidad en la solución de asuntos que, como la lucha contra el problema mundial de las drogas, la preservación del medio ambiente, el desarrollo social, los asuntos de carácter humanitario, y la búsqueda de la paz, son de interés compartido.

Este es el verdadero sentido del Plan Colombia, el cual presentamos ante ustedes. Es una estrategia integral para nuestro futuro y es también, el más ambicioso y coordinado programa de acción social que jamás se haya realizado en el país, con el propósito de crear nuevas y mejo-

res oportunidades de paz y progreso para los colombianos.

En esta tarea, nuestra estrategia busca incorporar de manera cada vez más activa a la sociedad civil como un elemento esencial para garantizar su éxito y darle la sostenibilidad. Como nunca antes había ocurrido en el país, el Gobierno Nacional ha venido trabajando con las organizaciones no gubernamentales, en casos como el de la reconstrucción del Eje Cafetero sacudido por el terremoto de enero de 1999. Ejemplos como el anterior constituyen una clara demostración de la voluntad del gobierno para que las organizaciones no gubernamentales participen en las diferentes etapas de desarrollo, implementación y seguimiento de los proyectos previstos en el Plan.

Yo sé que en algunos sectores de opinión existen ciertos interrogantes por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Este apoyo no es nuevo. Mi país desde hace varios años adelanta una alianza estratégica para vencer a este enemigo común. El argumento que se escucha es que la asistencia en este campo podría significar una escalada en la confrontación interna e incluso, con ligereza se afirma que podría convertirse en otro Vietnam.

Déjenme decirles de una vez por todas que ese escenario es perfectamente imposible. Ni el gobierno de Colombia, ni el de los Estados

Unidos han considerado jamás esa posibilidad, aun en las circunstancias más extremas. Y ni la opinión pública americana o europea o, lo que es más importante, ni nuestro propio pueblo, lo permitiría.

Lo que el gobierno de Colombia ha pedido es que se le colabore para enfrentar la naturaleza cambiante del narcotráfico. Esto significa penetrar áreas selváticas lejanas, de características excepcionales en nuestra singular geografía. Regiones apartadas e históricamente incomunicadas que se han convertido en los centros de producción de cocaína. Áreas en donde la producción de cultivos ilícitos se ha duplicado en los últimos cinco años y en donde se hace necesaria una estrategia para enfrentar ese crecimiento acelerado.

El gobierno ha pedido a la comunidad internacional, encontrando eco positivo en los Estados Unidos, que en esa tarea se proteja a los campesinos y a las comunidades que son víctimas del narcotráfico, apoyando el concepto de desarrollo alternativo integral que incluye la sustitución de cultivos, la generación de proyectos productivos para los campesinos, la reactivación económica, la infraestructura para la paz, la recuperación de los ecosistemas y el fortalecimiento de nuestro marco institucional.

En nuestras conversaciones con las ONG hemos dejado claro que en esta lucha antinarcóticos se va siempre a privilegiar la vida de los

hombres y las mujeres de Colombia sobre el objetivo mismo de acabar con los cultivos ilícitos.

Un deber moral

De otra parte, los grupos al margen de la ley tienen la oportunidad histórica de demostrar su voluntad de romper cualquier forma de vinculación con las actividades del narcotráfico; de cooperar en la erradicación de los cultivos ilícitos y permitir con su concurso la implementación de los programas de desarrollo alternativo y de recuperación ecológica previstos en el Plan. "Quien nada debe, nada teme", dice un viejo adagio popular.

Tienen el deber moral de corresponder con hechos de paz a las reiteradas muestras de generosidad del presidente Pastrana. De no ser así, es decir, si preservan sus nexos con la actividad más desestabilizadora y criminal que haya conocido la humanidad, será imposible para la sociedad colombiana y la comunidad internacional aceptar su reincursión en la vida política y social del país.

Esta es, sin duda, una gran ocasión para reiterar frente a la comunidad internacional aquí reunida, el compromiso del gobierno colombiano con la defensa y protección de los derechos fundamentales —en todas sus dimensiones—, y con la aplicación del derecho internacional

humanitario; y a la vez para demandarles un mensaje categórico a los diferentes actores de violencia a fin de que se comprometieran también con estos propósitos, indispensables para darle una oportunidad al deseo de paz de todos los colombianos.

La paz y la economía

En gran parte como producto de la violencia que padece Colombia, con sus secuelas de daños a la propiedad y de incertidumbre para la inversión, la economía pasa por las circunstancias más difíciles de los últimos setenta años.

Para mejorar su economía, Colombia necesita el apoyo continuado de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la comunidad internacional, de tal manera que se permita un acceso preferencial a los mercados.

Requiere la oportuna ampliación del ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) para poder tener condiciones comparables con las de otros países de la región, especialmente los cubiertos por la Iniciativa del Caribe. En igual sentido, se requiere el apoyo de la Unión Europea a través del Sistema General de Preferencias (SGP).

Colombia necesita estimular su economía para crear empleo y evitar que, por desespero, los jóvenes desempleados encuentren una

alternativa en el ilícito negocio de la droga.

Mientras el Estado tenga que hacer frente al mismo tiempo a varias violencias: la del crimen organizado, la del narcotráfico, la de las diferentes guerrillas, la de los grupos ilegales de autodefensa, será una entidad débil, de lo cual se beneficiarán precisamente los violentos.

Mientras subsista la confrontación armada existirá un caldo de cultivo propicio para las violaciones de los Derechos Humanos y las infracciones del derecho humanitario.

De allí la lógica de la concepción integral de la política del gobierno colombiano y de allí también, la filosofía de nuestra propuesta.

Necesitamos cooperación internacional, como una manifestación de solidaridad, pero también como una consecuencia de la corresponsabilidad derivada del narcotráfico.

Para los narcotraficantes, la aplicación de la ley con todo su rigor. Para los pequeños cultivadores, la sustitución de cultivos, ofreciéndoles alternativas viables de producción.

Hace algunas semanas, el presidente Pastrana señaló que Colom-

bia no está condenada al mal ni a la violencia ni a la corrupción. Hago más sus palabras cuando afirmé, evocando a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que "Yo sueño, todos soñamos, con un país donde predomine el color amarillo de las mariposas de Mauricio Babilonia y no el rojo sangre de la violencia. Yo sueño una Colombia con mucho trabajo pero también con alegres parrandas. Yo sueño un país donde el coronel sí tenga quien le escriba, donde la cándida Eréndira escape de la violencia intrafamiliar, donde los corruptos vivan su otoño y los honestos su primavera, donde no tengamos más una mala hora ni haya más muertes anunciadas ni noticias de un secuestro, donde terminemos con la hojarasca de la burocracia inútil, donde vivamos el amor y no solo en los tiempos del cólera, donde respiremos el olor de la guayaba y oigamos vallenatos, que es la música del alma colombiana.

Entre todos podemos escapar a la condena de otros cien años de soledad y podemos encontrar una segunda oportunidad sobre la tierra!"

Correo Diplomático por La Paz,
No. 44, Santa Fe de Bogotá,
10 de julio del 2000